

**COMISIÓN EXTRAORDINARIA INTEGRADA POR EL PLENO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA ANALIZAR EL VETO
PRESIDENCIAL AL DECRETO NÚMERO 34-2006 DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, E INFORMAR A ESTE PLENO.**

Guatemala de la Asunción, 5 de diciembre, 2006

DICTAMEN

ANTECEDENTES:

- 1) El Congreso de la República en ejercicio de las facultades que le otorgan la Constitución Política de la República -**Artículos 157; 171, literal a); 176, y 177-** y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, (Decreto Número 63-94, y sus reformas) -**Artículos 109, 110, 112, 113, 117, 120, 121 y 122-** aprobó en su sesión ordinaria del día 17 de octubre del año 2006 el Decreto Número 34-2006, que introduce reformas al Decreto Número 85-200, también de este alto Organismo, **LEY EN MATERIA DE ANTEJUICIO**, el cual fue trasladado como corresponde, en el plazo previsto -Artículo 177 de la Constitución Política de la República-, al Señor Presidente de la República para su sanción, promulgación y publicación.
- 2) El señor Presidente de la República en ejercicio del derecho de veto que le confieren los artículos 78 y 183, literales e) y h), de la Constitución Política de la República, por acuerdo tomado en Consejo de Ministros (Acuerdo Gubernativo No.542-2006) vetó aquel decreto (34-2006) señalando observaciones que, en su opinión, fundamentan el mismo, y lo devolvió al Congreso de la República, con fecha

- 3) El pleno del Congreso de la República conoció del veto a que se refiere el numeral anterior, en sus sesiones ordinarias de fechas ____ y _____. En esta última El Pleno del Congreso resolvió crear esta Comisión Extraordinaria para analizar el veto remitido por el Presidente de la República y le fijó un plazo perentorio de veinticuatro horas para que rindiera su dictamen.

**ANÁLISIS DEL ACUERDO GUBERNATIVO No.542-2006,
DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2006,
Y LAS OBSERVACIONES QUE SEGÚN EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA FUNDAMENTAN EL VETO DEL DECRETO 34-2006.**

PRIMERO:

En el segundo CONSIDERANDO y los párrafos cuarto, quinto y sexto del Acuerdo Gubernativo Número 542-2006, que contiene aquel veto, se señalan como observaciones para fundamentar el veto de parte del Señor Presidente de la República, que el contenido del Decreto Número 34-2006 afecta la independencia del Organismo Judicial al disponer que el Juez que tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada en contra de un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio traslade directamente las actuaciones al órgano que deba conocer, evitando con ello que canalice dicha remisión a través de la Corte Suprema de Justicia, órgano máximo de ese organismo del Estado, violentando con ello la independencia funcional que la Constitución Política de la República otorga a ese organismo del Estado, y lo establecido en el segundo párrafo del artículo 214 del texto constitucional, que establece que el Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República.

Que al Organismo Judicial le corresponde la función esencial de aplicar las leyes y declarar los derechos en los casos controvertidos que se sometan a su conocimiento, función que se está arrogando el Congreso de la República en el Decreto 34-2006.

Que la Ley Suprema en el artículo 203 contempla la independencia del Organismo Judicial y la potestad de juzgar, y que establecer si determinada conducta es constitutiva de delito o no requiere de un proceso judicial que la Constitución asigna exclusivamente a los jueces... y que por tal razón la punibilidad o no de un hecho corresponde calificarla al Organismo Judicial, aunque al Congreso de la República le corresponda la pesquisa por medio de una comisión, en forma extraordinaria.

COMENTARIO:

La reforma contenida en el Decreto 34-2006 del Congreso de la República sólo recoge la norma contenida en el artículo 293 del Decreto No.51-92 del Congreso de la República, y sus reformas (Código Procesal Penal) que es una norma de cumplimiento obligatorio, derecho positivo vigente, que no ha sido atacada de inconstitucionalidad y que en su primer párrafo expresa:

"ARTÍCULO 293. ANTEJUICIO. CUANDO LA VIABILIDAD DE LA PERSECUCIÓN PENAL DEPENDA DE UN PROCEDIMIENTO PREVIO, EL TRIBUNAL COMPETENTE, DE OFICIO O A PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, SOLICITARÁ EL ANTEJUICIO A LA AUTORIDAD QUE CORRESPONDA, CON UN INFORME DE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN EL PEDIDO Y LAS ACTUACIONES ORIGINALES. EN LO DEMÁS SE REGIRÁ POR LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y LEYES ESPECIALES..."

De igual manera, el artículo 3 del Decreto Número 85-2002 del Congreso de la República, Ley en Materia de Antejuiicio, define: Derecho de antejuiicio es la garantía que la Constitución Política de la República otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley. El antejuiicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable.

El antejuiicio no es un proceso de juzgamiento de carácter penal, es un trámite de averiguación para establecer la veracidad de una denuncia en contra de un dignatario o funcionario que goza de él ante la presunción de la comisión de un hecho delictivo y la posibilidad de que aquél pudiera tener participación en el mismo, sólo para privarlo de la impunidad y PARA SU SOMETIMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. El Congreso no se está arrogando atribuciones ni entrometiéndose en las actividades que no le son propias.

De conformidad con las prescripciones legales, el juez que recibe una denuncia en contra de un dignatario o funcionario con derecho de antejuiicio no puede, no debe, emitir opinión sobre si hay o no delito ciertamente en la denuncia, eso sería predisponer a la autoridad a la que corresponda conocer de ella para determinar si lo hay o no, y si el funcionario pudiera estar involucrado en él.

SEGUNDO:

En el párrafo siete, que se refiere el artículo 4 del Decreto Número 34-2006 del Congreso de la República, el Presidente de la República objeta que se pueda presentar la denuncia de la posible comisión de un dignatario o funcionario directamente ante la autoridad a la que corresponda conocer del antejuicio y, en su caso, despojarlo de la inmunidad.

Los Tribunales de la República están establecidos para juzgar un hecho tipificado como delito, y sancionar al responsable. En este caso no hay aún delito, es una suposición que pudiera haberlo, una denuncia pudiera no ser cierta y de presentarse ante los tribunales deja la huella indeleble dentro de los antecedentes de la persona; aún no se determina la existencia del delito, y el procedimiento de averiguación sobre la responsabilidad del funcionario denunciado podría ser declarado sin lugar por una denuncia falsa, espuria, política, etc.

COMENTARIO:

El argumento a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2 del Acuerdo Gubernativo Número 542-2006, obvia normas que ya se contemplan en nuestra legislación, puesto que, si bien es cierto, de conformidad con la Constitución Política de la República, el Ministerio Público tiene el monopolio de la acusación penal, toda persona que conozca de un hecho presumible de delito de acción pública y no lo denunciare será sancionado penalmente. Aparte de que, como cita en el siguiente párrafo, la corte de Constitucionalidad ha considerado: "... El antejuicio constituye una garantía para ciertos funcionarios expuestos sensiblemente a incriminaciones por actos realizados en ejercicio de su cargo ... y se ha instituido no sólo para protegerlos de la posible ligereza en la sindicación, sino para que las potestades de que están investidos no se vean interrumpidas injustificadamente con menoscabo de la continuidad y eficiencia de tales funciones... ", y esa es precisamente la labor de la comisión o juez pesquisidor. El propósito de la Comisión Pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar un actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos. Igualmente corresponde a la comisión determinadas si la investigación (**no es juicio**) se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario (artículo 17, literal g), decreto 85-2002).

Independientemente de que de suponer mala fe en la presentación de una denuncia o que ésta resulte falsa, el dignatario o funcionario podrá accionar penalmente en contra del denunciante en atención a lo prescrito en nuestra legislación penal.

Sí, efectivamente, la denuncia puede presentarse por la persona que se considere afectada o que conozca de un hecho que podría tipificarse como delito de acudir directamente ante la autoridad a la que corresponda conocer del proceso de antejuicio, porque como ha quedado establecido en el punto anterior, NO ES UN PROCESO JUDICIAL (JURISDICCIONAL), es un aparte, un trámite administrativo de investigación, y sólo que la autoridad que deba conocer del proceso de antejuicio después de que sea ratificada la denuncia, escuchado al funcionario involucrado, recibidos medios de prueba, y determina la probable comisión de un delito y aún más la probable participación de aquel funcionario podrá despojarlo de su inmunidad para que se someta ante los tribunales jurisdiccionales en donde con garantía del debido proceso podrá ser objeto de un juicio para determinar efectivamente si se cometió el delito que se le imputa y si es inocente o no, porque de conformidad con la Constitución Política de la República toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada (Artículo 14).

TERCERO:

En los párrafos octavo, noveno, décimo y undécimo, en aquel acuerdo gubernativo se cuestiona el hecho de que la reforma contenida en el Decreto Número 34-2006 estipula que para resolver una solicitud de antejuicio haya de hacerse con las dos terceras partes de los cuerpos colegiados, confundiéndose la pesquisa con el hecho de la votación de manera equívoca.

COMENTARIO:

Efectivamente, la Constitución Política de la República se refiere en sus artículos 159, 134, 165 -literales h) é i)-, 167, 172, 175, 176, 179, 233, 240, 278, 280, a las mayorías requeridas para la toma de decisiones por el Congreso de la República.

El artículo 159 del texto constitucional contempla genéricamente que las resoluciones del Congreso deben tomarse con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que lo integran, salvo los casos en que la ley exija un número especial, que es el caso de los restantes artículos citados en que

se requiere mayoría calificada (dos terceras partes), a excepción del artículo 240 en que específicamente se señala que para la elección del Contralor General de Cuentas deberá hacerse con mayoría absoluta de sus miembros. Pero estas normas son específicas para el Congreso de la República, no se extienden a otros órganos del Estado.

Sin embargo, la reforma obedece a la inequidad, trato desigual, que se da a los otros dignatarios y funcionarios del Estado a los que la carta magna concede el derecho de antejuicio (diputados, magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones, alcaldes, por ejemplo), para quienes la Constitución no atribuye a los órganos competentes de conocer las solicitudes de antejuicio una mayoría determinada para su resolución. Estimándose que si se omitió fijar la mayoría requerida para aquellas resoluciones, es legítimo legislar en tal sentido, atendiendo a que existe un vacío legal y que sobre el particular al analizar el artículo 4 de la Constitución Política de la República, la Corte de Constitucionalidad ha reiterado fundamentadamente que: **"...EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, PLASMADO EN EL ARTÍCULO 4º. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA IMPONE QUE SITUACIONES IGUALES SEAN TRATADAS NORMATIVAMENTE DE LA MISMA FORMA..."** EXPEDIENTES 141-92, 583-01, 1553-01, 885-02, 1338-02, 4858-02, GACETAS 24, 64, 65 Y 66, considerando este Congreso que Guatemala es un estado constitucional de derecho en que, a la Corte de Constitucionalidad le ha sido atribuida la interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes, a través del examen que de las mismas se contiene en las sentencias que emite, siendo por disposición constitucional imperativo el acatamiento de la doctrina legal sentada por este tribunal. (Acuerdo Número 49-02 de la Corte de Constitucionalidad, CONSIDERANDO IV).

DICTAMEN DE ESTA COMISIÓN

En cumplimiento del mandato concedido por ese Pleno, dentro del plazo perentorio fijado, los suscritos miembros de esta Comisión hemos llevado a cabo un estudio de las leyes atinentes: Constitución Política de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Ley del Organismo Judicial, Ley del Ministerio Público, Código Penal, Código Procesal Penal, Decreto Número 85-2002 (Ley en Materia de Antejuicio), Ley de Probidad y de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, y del Decreto 34-2006 de este Congreso que ha sido vetado por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, y concluimos que no existen los vicios señalados para no sancionar, promulgar y publicar aquel decreto, por lo que con todo respeto, salvando su mejor opinión, sugerimos al Honorable Pleno rechazar el veto del Decreto Número 34-2006 del Congreso de la República, contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 542-2006, de fecha 15 de noviembre del 2006, y trasladarlo

nuevamente al Señor Presidente de la República para su sanción y promulgación.

Respetuosamente,

COMISION EXTRAORDINARIA



Diputada CONCHITA MAZARIEGOS TOBIAS
PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN)




Diputada ANABELLA DE LEON RUIZ
PARTIDO PATRIOTA (PP)

Diputada VIRNA ILEANA LOPEZ CHACON
GANA



CESAR EMILIO FAJARDO
UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE)



JORGE ALFONSO RÍOS CASTILLO
FRENTE REPUBLICANO GUATEMALTECO (FRG)

VOTO Razonado EN
Contra.